

Volcamiento de uranio: "Siempre se ocultó la verdad"

Si bien hace once años que la empresa minera Sánchez Granel abandonó la explotación de los yacimientos de uranio en Los Gigantes, los volcamientos de ese mineral en el cauce del arroyo El Cajón comenzaron casi con el inicio de la actividad minera. Hoy, desde el Estado provincial quieren vaciar los desechos tóxicos que permanecen en el lugar. Diversas instituciones zonales denuncian la falta de información al respecto, al tiempo que convocan a los vecinos a una participación ciudadana activa en pos de la preservación del medio ambiente y de la salud de los habitantes de la región.

ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio) es una de las organizaciones que asumió la responsabilidad de mediar ante el gobierno provincial con el objetivo de garantizar el tratamiento correcto de los desechos tóxicos que se encuentran en Los Gigantes. A los fines de conocer los tristes pormenores de la amenaza del uranio en la zona, Pueblo Grande habló con Juan Carlos Ferrero, presidente de ADARSA, quien brindó una visión integral de un problema que afecta a todos los pobladores de esta provincia.

El yacimiento de uranio que se pretende clausurar volcando los desechos tóxicos acumulados al río San Antonio, se ubica entre dos arroyos: El Cajón y El Cambuche. El primero de ellos desemboca en el río que atraviesa las cinco comunas que conforman el sur de Punilla y, según los especialistas consultados, los volcamientos sucedieron desde siempre ya que las lluvias fueron rebalsando el dique de desechos. En Los Gigantes llueve entre 1000 y 1100 milímetros anuales, lo que permite sostener que las crecidas derraman sustancias tóxicas al río y en ese sentido *"siempre se ocultó la verdad"*, destacó Ferrero.

Lo central de esta problemática zonal radica en la desinformación; se desconoce, por ejemplo, si existen materiales radioactivos en esa reserva y, en función de las sustancias reconocidas, está en juego nada más y nada menos que el riesgo de contraer cáncer.

"Nosotros presionamos porque no queremos que cierren la mina y se vayan, queremos que la limpien", dijo Juan Carlos Ferrero con el fin de explicar el objetivo de las acciones que llevan a cabo desde ADARSA.

En efecto, el conflicto se revivió cuando en el Boletín Oficial apareció una resolución de la DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) que concedía el certificado de factibilidad para realizar los volcamientos. Esto no quiere decir que la preocupación por la temática no permaneciera en las acciones de los ambientalistas de la zona, sino que en este momento se asiste a la urgencia de concientizar a los pobladores acerca de los riesgos que implica para la salud la contaminación del río.

De todos modos, si bien desde el gobierno aducen que los fluidos tóxicos serán tratados con anterioridad, las dudas aparecen por las intrigas que genera el no poder acceder a la mina en Los Gigantes y los obstáculos que pone el gobierno a la participación ciudadana en el diseño de los programas a través de los cuales se intentaría solucionar la problemática aquí descrita.

Lo cierto es que al inicio de la temporada veraniega existen intereses que se contraponen a la denuncia de contaminación; mientras tanto ADARSA, por ejemplo, está convocando a las instituciones de la zona y a los vecinos en general para que las autoridades informen acerca de lo que ocurre en Los Gigantes. *"Nosotros exigimos que se cumpla la ley, que la comisión encargada de planificar las acciones en la zona tenga un representante de las comunas o municipios afectados y un representante de las ONG que*